

FERNANDO ENRIQUE CARDOZO  
Sociólogo

## PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y ACCIÓN POLÍTICA \*

**III** e complace especialmente participar del homenaje que este Congreso dedica a mi amigo y conciudadano Paulo Freire, quien ha revolucionado el pensamiento sobre la educación en Brasil y en el mundo, y quien nos ha obligado a poner atención a la relación de la educación con la promoción del individuo como ciudadano, como actor social capaz de cambiar su propio destino a través de la participación en la vida política.

Su fallecimiento ha sido una pérdida sensible para sus amigos y para el pensamiento social brasileño y latinoamericano. Para todos los que se ocupan de la reflexión sobre la sociedad y de la acción para el cambio social, el nombre de Paulo Freire seguirá siendo un emblema de la disposición generosa de luchar por una sociedad más igualitaria y de otorgar a la educación el lugar que merece entre los derechos más básicos de los ciudadanos. Deseo expresar aquí el más sincero reconocimiento por la labor ejemplar de este gran brasileño.

Mis caros amigos y colegas: Las discusiones en este Congreso deberán tratar de algunos temas que son clave para la comprensión del momento histórico actual y para una mejor evaluación de la posición y del rol del investigador en nuestras sociedades, sus desafíos y su importancia en la participación democrática que es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestros países.

Ya el mismo título de este evento, al reunir las ideas de investigación y participación, señala una cuestión permanente para los científicos sociales: la de las relaciones entre la actividad política y la actividad académica.

Quisiera compartir con Ustedes algunas inquietudes y reflexiones personales, desde el punto de vista de mi experiencia como alguien que ha vivido la doble condición de político y sociólogo, de hombre de gobierno y académico.

\* Mensaje del señor Presidente de la República del Brasil, Doctor Fernando Enrique Cardozo al IV Congreso Mundial sobre Investigación-Acción Participativa-IAP (Cartagena de Indias, Colombia, 1-4 de junio de 1997). Este texto ha sido cedido para publicación en la Revista Colombiana de Psicología, por el Sr. Embajador de la República del Brasil.

Desearía hacerlo como intelectual, tomando alguna distancia en relación con mi condición de político. Pero este no es un esfuerzo sencillo. En la política, cuando hablan quienes ejercen funciones públicas, lo que importa no es tanto lo que se dice como quién lo dice. El mensaje resulta inseparable del mensajero. De cualquier forma, hago constar la intención académica de mis palabras.

Quizás el marco más tradicional para pensar esta relación entre la academia y la política, entre la cátedra y la tribuna, sea la distinción weberiana entre las dos actividades. En este marco, se plantearían dos lógicas distintas y separadas, correspondientes a la separación entre hechos y valores. El pensamiento científico sobre la sociedad estaría orientado por el estatuto ético de la libertad, como condición necesaria para la búsqueda de la verdad. La acción política, al revés, sometida a una lógica de la necesidad, no se vincularía al mundo de los valores, y estaría necesariamente contaminada por la ideología, por los intereses, además de vincularse a una preocupación constante por las consecuencias.

Dicha distinción tiene efectivamente mucha fuerza y ofrece instrumentos de análisis que son, sin lugar a dudas, muy importantes en la reflexión sobre las diferencias entre los dos tipos de actividades.

En la misma evolución del pensamiento social en Brasil —y estoy seguro de que lo mismo podría decirse de todos los demás países—, se ha hecho presente, algunas veces, la oposición entre una actitud académica pura, orientada hacia el rigor científico de la investigación, y una actitud más comprometida con la transformación de las estructuras sociales, donde el proyecto político de cambio social era la prioridad y el rigor científico

quedaba, por decirlo así, en segundo lugar. Así fue, por ejemplo, a principio de los años sesenta, en la relación entre las corrientes de pensamiento de la Universidad de Sao Paulo, más preocupadas con la "pureza" científica, y el grupo de intelectuales reunidos en el Instituto Superior de Estudios Brasileños, el ISEB, más comprometidos con la elaboración de pautas para un proyecto nacional.

Hoy día, aprovechando las ventajas de una sabiduría retrospectiva, queda claro que, en cierta forma, los dos lados de esta controversia "tenían razón", pues ambos lidiaban con problemas reales. De un lado, era y es efectivamente necesario otorgar mayor consistencia al conocimiento de la realidad, lograr mejores condiciones de rigor y perfeccionar la calidad científica a la investigación. Pero bajo un ángulo distinto, e igualmente legítimo, era y es imposible, para un intelectual, alejarse olímpicamente de una realidad injusta, donde la desigualdad era la norma y donde prevalecían las formas autoritarias.

Para mencionar otro ejemplo, la historia del desarrollo del pensamiento social latinoamericano en la CEPAL ofrece una ilustración muy interesante de la relación entre conocimiento y proyecto político. No caben dudas de que las investigaciones conducidas en el marco de la CEPAL, especialmente a partir de las reflexiones de Raúl Prebisch, estaban orientadas hacia el establecimiento de bases rigurosas de análisis de la realidad económica latinoamericana. Sin embargo, estas investigaciones estaban enmarcadas, simultáneamente, por un "proyecto necesario", del deterioro de los términos de intercambio se concluía la necesidad de substituir importaciones. En este caso, el conocimiento precedía a la propuesta política.

En otros casos, sin embargo, esto no es así. La cuestión de saber lo que viene antes, si el conocimiento o el proyecto político, oculta una realidad compleja, donde los dos términos están dialécticamente mezclados en la estructura de la acción humana.

Ahora bien, si combinamos las dos tradiciones opuestas —la del intelectual en la torre de marfil y la de la teoría como un trampolín necesario e ideal para la acción política— llegamos a algunas indagaciones interesantes:

—¿Acaso es posible conciliar rigor y proyecto? ¿Qué papel tiene el rigor del conocimiento en el proyecto político?

—¿Es acaso posible conocer, con alguna objetividad, el mejor proyecto para determinadas circunstancias históricas? ¿El conocimiento predetermina el proyecto?

Son preguntas que dejo a la consideración de este Congreso.

El examen del tema apunta hacia la complejidad de la relación recíproca entre conocimiento y realidad social.

Y esta complejidad resulta particularmente evidente cuando examinamos más de cerca la cuestión del *cambio social*, de la transformación de las sociedades, que es un tema central para quien trabaja como sociólogo o como político en América Latina. Este es un tema que combina dialécticamente reflexión y proyecto, pensamiento y acción. Siempre que se habla de transformación, la referencia necesaria son los valores, son los objetivos y rumbos de la transformación. Son los valores los que pueden movilizar políticamente, articular la base social del cambio.

En el marco de la relación entre la academia y la acción política, podemos preguntar: ¿Quién da las pautas para el cambio? ¿Cómo se definen los ideales que orientan el esfuerzo de transformación?

Al considerar estos interrogantes a la luz de nuestra experiencia práctica, caímos en cuenta de que, a menudo, las actitudes de académicos y políticos involucran una inversión paradójica de la perspectiva inicial, de la separación entre hechos y valores. Efectivamente, encontramos en muchos casos que los académicos se presentan como abogados de valores puros, moralmente superiores a las trampas y contingencias de la vida política. En esta visión, los políticos estarían condenados a actuar en un mundo donde la crueldad de los hechos no dejaría espacio para una referencia ética auténtica. La academia sería, así, también en términos weberianos, representante de una ética de la convicción, mientras que la política resultaría el campo de la responsabilidad, entendido en forma abstracta como algo separado y opuesto a la pura convicción.

Pero, si miramos más de cerca, también esta perspectiva resulta insuficiente.

En una sociedad democrática, no deben y no pueden existir "monopolistas" del valor, de la verdad, de los ideales de cambio. Si creyéramos que los que actúan en la política tuviesen el monopolio en la definición de los valores, el pensamiento político académico estaría reducido a un saber de tipo técnico, que podría utilizarse en forma indiferente para cualquier proyecto de cambio social. Si creyéramos, al revés, que los intelectuales y académicos tuvieran el monopolio de la ética, que la pureza de la academia fuera el único espacio para la afirmación de valores auténticos, la actividad política quedaría reducida a una acción de tipo técnico, de maximización de intereses definidos sin referencia a ninguna perspectiva ética.

En cualquiera de estas hipótesis, el resultado sería insatisfacto-

rio: sería una descalificación tanto del trabajo académico como de la acción política.

Las distintas perspectivas —la del intelectual, la del político y ahora también la de los liderazgos de los movimientos sociales, en las ONGs— deben contribuir todas, en el debate público, para que se alcance el equilibrio entre lo ideal y lo posible.

Exactamente porque el diálogo es un paso indispensable para la construcción de la legitimidad democrática —en la línea de pensamiento de Habermas—, las posiciones de quienes participan en el espacio público no pueden ser sólo de defensa de valores irrealizables, no pueden tener como objetivo simplemente el obtener ganancias de movilización, ventajas a corto plazo. El riesgo de una perspectiva meramente intelectual es el de transformar los fines en táctica. Y convertir los fines en táctica significa apartar los valores de la acción política real.

A su vez, el riesgo del político es olvidar los valores y tratar a la actividad política como un fin en sí mismo, como algo limitado a las posiciones de poder, a las ventajas personales o de grupos. En este sentido, la política se convierte en una técnica, el mundo de las "consecuencias" prácticas prevalece sobre los objetivos de bien común.

En mi experiencia personal en la vida política, encuentro que el beneficio de la referencia intelectual está precisamente en permitirme estar consciente de estos riesgos de actividad política, y evitarlos. Encuentro que mantener un diálogo constante con los valores es justamente lo que permite, o más bien, impulsa al político a mirar más allá del juego del poder, a buscar la orientación ética, a plantear en cada decisión la pregunta: ¿Podría esto hacerse mejor, de una

forma que beneficiara a más personas?

Encuentro, asimismo, que el intelectual puede aprender con la actividad política que los límites humanos e históricos son también un valor, que resulta importante para modular las formas fáciles del voluntarismo.

Ello no significa, de ninguna forma, que se disminuya el impulso ético, que se soslaye la voluntad de luchar por un mundo mejor. Al contrario, significa buscar las condiciones que permiten que esta voluntad encuentre formas concretas de expresión en la realidad. Significa entender que la voluntad, ya sea de un hombre o de un grupo social determinado, es sólo una parte de la realidad.

La convicción y la responsabilidad no son necesariamente opuestas. Ante la incertidumbre que caracteriza la decisión política, la convicción —siempre y cuando no se convierta en un dogma ajeno a la realidad— puede ser clave para garantizar un rumbo para la sociedad.

Quisiera concluir con unas observaciones sobre las tendencias más recientes en nuestras sociedades y en el marco internacional, tendencias que, a mi modo de ver, subrayan la importancia de un diálogo permanente y una interacción cercana entre la academia y mundo político, entre el intelectual y el hombre de gobierno.

En primer lugar, la consolidación y la profundización de la democracia en América Latina ha dado una importancia aún mayor a la dimensión ética de nuestra vida política, haciendo al mismo tiempo más difícil, más complejo, el manejo cotidiano de la política. La democracia conlleva una ampliación del espacio de las demandas sociales, que se multiplican y cobran mayor urgencia, en la medida en que los movimientos so-

ciales asumen una actitud más protagónica de participación. Las sociedades reconocen sus injusticias de forma mucho más clara y piden urgencia para solventar los antiguos problemas sociales. Al mismo tiempo, los instrumentos de solución de dichos problemas deben ser "negociados".

En razón del esfuerzo de conciliación de los distintos intereses sectoriales, expresados a través de las crecientes formas de participación que la democracia debe incorporar, vuelve más urgente la tarea de un diálogo político capaz de producir lo universal a partir de lo particular. El pensamiento, la referencia al universal, cobra así una nueva importancia en la búsqueda del bien común.

En tal contexto, cobra una nueva significación la reflexión de Montesquieu sobre la necesidad de la virtud ciudadana como móvil de la acción política en el marco republicano. En una democracia, el ser ciudadano significa algo más que votar periódicamente. Supone la discusión, el pensamiento, un cierto tipo de sabiduría política, sin lo cual la acción política no se distinguiría de la conducta basada en intereses individuales o de grupos.

No se trata, por supuesto, de descalificar o ignorar los intereses.

Al fin y al cabo, es parte legítima de la vida democrática la competencia entre grupos, dentro de normas, para mejorar su posición respectiva en la economía o en la sociedad. Sin embargo, así como el mercado es un dato de la realidad económica, pero no puede responder por la dirección de la economía —porque no incluye el elemento de los valores éticos—, la competencia política, el juego del poder no es todo, no resuelve todos los problemas de una democracia.

Ello indica, en primer lugar, que la buena práctica política con-

lleva necesariamente la reflexión, el conocimiento, y no sólo una reflexión de tipo técnico, sino de tipo ético; una reflexión orientada hacia la universalidad de la *res pública*. Si no fuera así, no habría cómo evitar los riesgos del corporativismo y el espacio público se vería, por decirlo así, "secuestrado" por los intereses de los grupos privados.

Al mismo tiempo en que vivimos estos cambios característicos de la consolidación de la democracia, somos testigos de transformaciones muy rápidas en las formas de interacción social, dentro y entre los países, en consecuencia de las innovaciones tecnológicas que han modificado radicalmente los patrones de producción, de comunicación y de transporte. Hay una aceleración de los procesos de cambio, que alcanzan un tal ritmo que nuestra capacidad de reaccionar a ellos podría resultar a menudo insuficiente.

¿Qué importancia tiene esto para la reflexión sobre la política? Una importancia fundamental, que estriba en el hecho de que, quizás más que nunca antes las decisiones de gobierno deben estar "iluminadas" por el pensamiento, deben beneficiarse precisamente de la visión de largo plazo que constituye la ventaja comparativa de la academia.

No reaccionar a los cambios, y yo diría también, no anticipar estos cambios, es un lujo que no podemos permitirnos. Así como en las épocas de guerra, cuando el conocimiento del terreno puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, la cartografía puede convertirse de un arte académico en una cuestión prioritaria de seguridad del Estado, de la misma forma, en nuestra época —que no es de guerra, pero que es de cambios de enorme importancia— la cartografía del terreno que tenemos por

delante, el análisis riguroso de las oportunidades y riesgos planteados por las nuevas situaciones pueden significar la diferencia entre el desarrollo y la marginación, entre el éxito y el fracaso de las sociedades.

Cada vez más, por lo tanto, el conocimiento debe "iluminar" la acción política. No podemos, en el momento actual, permitirnos una visión estática de la relación entre la teoría y la práctica —y desafortunadamente este tipo de visión se encuentra todavía muy a menudo tanto en nuestras Universidades como en los que se dedican a la actividad política.

En este tema, ya no se puede tomar a Weber como paradigma. Los desafíos de la situación actual requieren algún tipo de fusión —pero sin confusión— entre las dos lógicas que he mencionado en mis palabras iniciales: la lógica del conocimiento y la de la acción. En el marco de nuestras democracias, la tradición del republicanismo, al buscar una síntesis de pensamiento y acción en el concepto fundamental de la virtud republicana, resulta más productiva, más actual que una distinción abstracta entre hechos y valores, o entre convicción y responsabilidad.

Es en este espíritu que envío a los participantes del IV Congreso de Investigación —Acción Participativa— mis mejores saludos, en la seguridad de que sus trabajos aportarán una contribución importante para el pensamiento sobre los problemas de nuestra época y sobre el destino de nuestras sociedades en el momento en que se acercan los albores de un nuevo siglo, lleno de nuevas oportunidades y esperanzas para los que, como yo y como Ustedes, creen en el conocimiento y en la acción política como instrumentos para construir una sociedad más justa Ψ